

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS PARES.

PRECIOS DE SUSCRICION.—En Orense, por trimestre, 5 pesetas.—Para fuera de esta capital, franco de porte, por trimestres adelantados, 7 pesetas.—Números sueltos, 38 céntimos.

Se suscribe en esta capital, Imprenta de José M. Ramos y Antonio Otero, Colón, núm. 16.—En las demás provincias, en las principales librerías.

PRIMERA SECCION

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA

DEL CONSEJO DE MINISTROS

El Sr. Ministro de Gracia y Justicia, Sr. D. R. la Señal. Señora Princesa de Asturias y las Serenas Infantas Doña María del Pilar, Doña María de los Pazos, Doña María Estalía continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL ORDEN

En el expediente de suspensión del Ayuntamiento de esa capital, decretada por V. E. en 15 de Noviembre del año próximo pasado, la Sección de Gobernación del Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: Según lo dispuesto en el art. 191 de la ley Municipal reformada en 2 de Octubre último, con Real orden de 10 del corriente mes, se ha remitido a informe de la Sección el expediente de suspensión del Ayuntamiento de Santander.

Adoptada esta medida por el Gobernador de la provincia en 15 de Noviembre último, la comunicó por telegrafo, y elevó el expediente al Ministerio del digno cargo de V. E. manifestando en su comunicación del día 19.

Que con motivo de haberse denegado al Ayuntamiento que funcionaba en 24 de Diciembre de 1874, el Gobernador que se hallaba al frente de la provincia lo reemplazó con otro, más como se reemplazó al primero por Real orden de 27 de Enero de 1875, los Concejales que cesaron por virtud de esta orden se consideraron desairados, reproduciéndose las disidencias que de antiguo existían entre ambas parcialidades.

Que esta división se pronunció más al aproximarse la renovación de Ayuntamiento, por lo que la misma violencia surgió la idea de la «Reconciliación» que se intentó en vano, pues después de convocar los dos fracciones en apoyo cada una 14 candidatos para los 28 Concejales de que se compone aquel Ayuntamiento, hubo lucha en un Colegio elec-

toral, resultando proclamados por cuenta propia dos individuos con quienes no se contrabaja y se convoca a la sesión.

Al que desequilibradas de este modo las fuerzas, se despertaron desconfianzas; las cuales se acentuaron con los nombramientos de Alcalde, Tenientes de Alcalde, Síndico y Comisionados, cuyos cargos recaerán en la «fracción» que había estado en Enero de 1875 en minoría.

Que desde aquel momento se formó una oposición que se hizo notoria con escándalo, en los actos públicos, más como el Alcalde trató de reprimir tales desórdenes, se arrojó la acusación de desobediencia al Concejal D. Lino de Villa Ceiballos, quien le dirigió frases duras en las sesiones del Ayuntamiento, y publicó en el periódico político La Voz Montañesa comunicados en que se señalaba de un modo incompleto los asuntos administrativos de la Corporación.

Que los consejos, amonestaciones y recomendaciones que el Gobernador dirigió a todos y cada uno de los Concejales fueron inútiles para calmar la irracionalidad, animo en que se hallaban, dándose lugar a provocaciones y escenas desagradables entre los individuos de la Corporación.

Que el proceder motivó la renuncia de dos Concejales y la licencia prolongada de otros, llegando al extremo de no poderse celebrar sesiones ordinarias ni extraordinarias, teniendo lugar solamente las de segunda convocatoria con escaso número de Concejales, sin obtenerse mejor resultado con las multas que se imponían a los no concurrentes.

Que en tal situación, los Tenientes de Alcalde D. César Pumbo, D. Santos Gandarillas, seis Concejales más, unidos a que quedó reducida la llamada mayoría, presentaron en sesión secreta una proposición para que se declarase la incapacidad del Alcalde, por tener participación en una Sociedad que representaba en aquella provincia la del Timbre. El Alcalde negó a aquella Asamblea atribuciones para privarle de un cargo que le había conferido el Gobierno de S. M., así como para invalidar su elección de Concejal por una representación que tenía antes de ser elegido, impidiendo con estas aclaraciones que los concurrentes tomasen acuerdo alguno.

Que los expresados Tenientes de Alcalde y cuatro de los mismos Concejales publicaron en La Voz Montañesa la referida proposición, al tiempo de elevarla al Gobernador, lo cual en concepto de esta Autoridad constituía una extralimitación con carácter político.

Que en aquellos días la prensa de la localidad y de la provincia, que representaban diferentes intereses y opiniones

se ocupaba de los asuntos del Ayuntamiento, sobreviniendo un lance personal entre dos individuos de la Corporación y el director del Boletín del Comercio.

Que por efecto de las medidas adoptadas para la oportuna asistencia de los Concejales a las sesiones, presentaron al Gobernador la dimisión de sus cargos el Alcalde, dos Tenientes de Alcalde y diez Concejales, significando la imposibilidad absoluta en que se hallaba el Ayuntamiento de funcionar dentro de la órbita legal.

Que ante la gravedad de las circunstancias, pidió el Gobernador relación de los Concejales que habían concurrido a las sesiones, y de las licencias obtenidas por otros, así como la comprobación de las firmas de los comunicados dados a luz en la prensa, uniéndose además los partes de la Inspección de orden público en que se daba cuenta de la sobreexcitación del vecindario a causa de los sucesos del Ayuntamiento, que motivaron un nuevo lance personal entre un individuo de la Corporación y un redactor del periódico.

Y que una vez ratificados los Concejales dimisionarios en sus respectivas renuncias, expresando la mayor parte la resolución irrevocable de no asistir a las sesiones, cualesquiera que fuesen los medios que se empleasen para compelerles a ello, juzgó el Gobernador llegado el caso de suspender al Ayuntamiento como lo verificó en el referido día 15 de Noviembre, nombrando otro compuesto de individuos que habían sido Concejales por elección en épocas anteriores, llevándose a efecto el cambio con muestras inequívocas de asentimiento público.

Independientemente de la comunicación del Gobernador que se lleva extractada, los Concejales suspensos D. César Pumbo, D. Santos Gandarillas, don Isidoro Alonso, D. José de Uzendun, don Ricardo Horga, D. Jacinto San Miguel, D. Julian de Asas, D. Ramon Cibrero, D. Pedro de la Portilla, D. Casiano Arzate y D. A. Perez del Molino, en exposición dirigida a V. E. con fecha 21 de Noviembre, después de extenderse en diversas consideraciones, sostienen que no han cometido extralimitación grave con carácter político, ni han incurrido en desobediencia a los mandatos de la Autoridad por la cual hayan sido apercibidos ni multados, que son las dos únicas causas que la ley señala como motivos de suspensión; medida que en su concepto nunca podría alcanzar más que a los que aparesiesen reos de aquellos abusos entre los que no se consideran comprendidos los recurrentes, por lo cual protestan de la providencia del Gobernador.

Informando dicha Autoridad acerca

de la expresada instancia, manifiesta que ningún Concejal había tratado de inquirir la causa de su resolución, sin duda por la conciencia que tenían de los hechos así como de la oportunidad, imperiosa necesidad y razón legal en que aquella descansaba; terminando por repetir los principales hechos que se ven confirmados en los documentos que forman este voluminoso expediente.

Entre otros particulares menos importantes que el Gobernador omite, se cuenta el recurso interpuesto para ante el Ministerio del digno cargo de V. E. por los Concejales D. José Colongues y don Lino de Villa Ceiballos contra el acuerdo de la Comisión provincial, confirmatorio de otro del Ayuntamiento de la capital, en que desestimó la proposición presentada por los recurrentes acerca de la incapacidad del Concejal D. Santos Gandarillas para el desempeño del cargo, por hallarse comprendido, a su juicio, en el núm. 6.º, art. 39, de la ley Municipal, hoy 43 de la de 2 de Octubre último; esto es, por mantener contienda administrativa con la Municipalidad sobre el cumplimiento de ciertas obligaciones como concesionario del tranvía de la ciudad al Sardinero.

Tales son, en resumen, los acontecimientos que han tenido lugar en Santander, y que, por su naturaleza y la publicidad que se les ha dado, no han podido menos de revestir cierta gravedad, y de impresionar profundamente al vecindario, según indica el Gobernador.

Examinándolos en conjunto, es preciso reconocer que la lucha mantenida dentro de aquella Municipalidad, no ha presentado carácter político que pudiera trascender al resto de la Nación, ni afectar a las instituciones ni a los poderes constituidos. El espectáculo que allí se ha dado ha reconocido causas de otra índole y puramente locales, que la Sección se abstiene de calificar.

Analizando en sus detalles el expediente, nótese desde luego una falta lamentable de prevision y energía en las Autoridades, que, inducidas por un exagerado espíritu de benevolencia, han dejado precipitar los sucesos, hasta el punto de haber sido un verdadero peligro para el orden público, primer elemento de la vida social. Ni el Gobernador, dando demasiada tregua y latitud a las informaciones; absintiéndose de presidir las sesiones más turbulentas del Ayuntamiento; concediendo licencias a los Concejales, que a su Autoridad no correspondía; y dejando de hacer efectivos las multas con que continuó a los mismos; ni la Comisión provincial, con la excesiva importancia que atribuyó a los hechos y la irresponsabilidad que reconoció en

sus autores (folio 307); ni el Alcalde, consintiendo á veces discusiones imperinentes, y tolerando que en las actas de las sesiones no se hiciesen constar ciertas opiniones de la minoría, ó se omitieran hechos que, por reprobados que fuesen, interesaba que quedasen consignados, han comprendido su verdadera misión, ni la extensión de los deberes que la ley les impone, exagerando una levedad á todas luces inconveniente.

Es asimismo censurable la conducta de algunos Concejales, que, con sus polémicas estériles y apasionadas, ó su negligencia en asistir á las sesiones del Ayuntamiento, no han sabido corresponder á la confianza que depositó en ellos el cuerpo electoral.

La Sección, aun contrariando su propósito de no herir susceptibilidades personales, no puede prescindir de hacer expresa mención del modo de proceder de D. Lino de Villa Ceballos.

Este Concejal, que por algún tiempo estuvo desempeñando interinamente el cargo de Teniente de Alcalde, celoso en su distrito de la disciplina y el orden según se observa en el bando que, circular á los funcionarios subalternos de su demarcación, y que publicó en periódicos políticos, no supo, sin embargo, dar ejemplos de moderación, respeto y subordinación en el seno de la Corporación municipal.

Durante las sesiones públicas, suscitó multitud de dificultades y conflictos, ora extremando su iniciativa de formular proposiciones, algunas de las cuales eran unos tantos votos de censura, ora pronunciando frecuentes discursos, en que dirigía frases duras y malsonantes al Alcalde (folios 15 al 19), ora usando de actitudes y ademanes que el público sensato no podía menos de vituperar.

Dijo á la prensa política, y á veces con nombre propio, y otras con pseudónimos, que reconoció suyos, acuerdos, in-completos del Ayuntamiento, proposiciones de que aun no se había dado cuenta á la Corporación; un acta de sesión secreta (folio 127), y varios comunicados irrespetuosos y depresivos para el Alcalde-Presidente (folios 23, 294 y otros), traspasando los límites del deber como Concejal, y los de las conveniencias sociales como ciudadano, y abusando de la libertad de la prensa.

En suma, la debilidad de unos y la intemperancia y los desmanes de otros, relajaron el principio de Autoridad y prepararon una situación violenta.

Para reprimir tales excesos administrativos, no existe pena bastante severa en la legislación que rige.

La mayor que reconoce la ley municipal para los Alcaldes y Tenientes es la separación, que, después de oír á los interesados, debe acordarse en consejo de Ministros (art. 189).

Los Ayuntamientos corporativamente solo pueden ser suspendidos por un término que no exceda de 30 días, pasado el cual, sin que se haya mandado proceder á la formación de causa, vuelven los Concejales suspensos de hecho y de derecho al ejercicio de sus funciones (art. 190).

El art. 191 previene que si el Gobierno entiende que la suspensión de los Regidores no es procedente, revocará por sí y dentro de 15 días el acuerdo del Gobernador, añadiendo que en caso contrario, rehusos, en el de deberse mantener la suspensión, pasará el expediente al Consejo de Estado, oído el cual, y en un plazo que no exceda de 40 días, dará la resolución definitiva.

El Jurado que se ha llamado al expediente remitiéndolo al Consejo, denota desde luego que no se estima procedente la suspensión decretada por el Gobernador de Santander, pero la Sección, sin dejar de comprender la gravedad de los sucesos ocurridos en aquel Ayuntamiento, antes

bien, dándoles toda la importancia que en si tienen, y deplorando lo deficiente de la legislación, halla que la medida adoptada por dicha Autoridad no está estrictamente ajustada á la ley, ni por las circunstancias del caso ni por la aplicación general que se ha hecho de la pena.

Segun se lleva indicado, la ley no admite más que dos causas de suspensión de los Ayuntamientos, que por extensión pueden comprender individualmente á los Regidores que no desempeñen cargos de Alcalde y Tenientes, á saber: la excomunión grave con carácter político, acompañada de cualquiera de las circunstancias siguientes: haber dado publicidad al acto; excitar á otros Ayuntamientos á cometerla; producir alteración del orden público, y la desobediencia también grave, insistiendo en ella después de haber sido apercibidos y multados.

Que el desconcierto producido en la Corporación municipal de Santander no tuvo carácter político en el sentido de la ley, no ofrece duda para la Sección, segun se deja ya indicado, y como los acuerdos y comunicados que vieron la luz pública en periódicos políticos, no tenían aquel carácter, ni la sobreexcitación del vecindario produjo alteración material del orden público, la suspensión fundada en tal motivo carece de base legal.

Si el Gobernador, en vista de la actitud de ciertas individualidades y del giro que se daba á la gestión administrativa, hubiera hecho efectivas, con mano fuerte y sin contemplación alguna, las multas que podía imponer por las omisiones, abusos y excesos de que se ha hecho mérito al insistir los culpables en las mismas faltas, hubiera pesado sobre ellos la responsabilidad de la desobediencia grave, y entonces estaría muy en su lugar la suspensión. Pero en el expediente no consta si las multas con que dicha Autoridad conminó á los Concejales, colectiva ó particularmente, por su falta de asistencia, se llevaron al efecto (folios 309 y 311).

Tampoco resulta si la decretada contra D. Lino de Villa Ceballos en 16 de Mayo de este año la satisfizo ó no, ni qué providencia recayó con motivo de la reclamación gubernativa que él mismo produjo.

Acercá de estos extremos hay un gran vacío en el expediente, que impide formar juicio exacto de si por razón de desobediencia, después de apercibidos y multados, puede sostenerse la corrección impuesta respecto de todos ó de parte de los Concejales.

La Sección, por tanto, mientras se particular no se dilucide, cree oportuno mantener la suspensión decretada.

Compréndese perfectamente el mal efecto que ha de producir en la localidad que por ministerio de la ley vuelvan los Concejales suspensos, ó la mayoría de ellos, al desempeño de sus cargos, y la situación crítica del Gobierno, al no poder tomar una disposición severa, que no cabe dentro del círculo de la legalidad existente. Si al Consejo le fuese dado proponer temperamentos salvadores fuera de esos límites, lo haría sin vacilación; pero su misión es informar los asuntos de gobernación y administración con arreglo á las leyes, y le está vedado consultar otras medidas.

Aparte, pues, de la responsabilidad criminal que algunos Concejales de Santander pueden haber incurrido, y que solo á los Tribunales corresponde apreciarla, la Sección entiende que, mántese la suspensión solo respecto de los que resulten culpables de desobediencia grave, y que hubieran insistido en ella después de apercibidos y multados, no cabe otro recurso que hacer las prevenciones oportunas al Gobernador

para que, segun los resultados del expediente, imponga multas á los que por su negligencia ó abuso se hayan hecho merecedores de esa corrección, encargándole muy particularmente que vele por la rigurosa observancia de las leyes, adoptando todas aquellas precauciones y medidas que caen dentro de sus atribuciones.

Siendo obligatorio el cargo de Concejal, no pueden admitirse otras dimisiones que las que se funden en las incompatibilidades ó excusas que se enumeran en el art. 43 de la ley Municipal; así es que una vez repuestos los Concejales cuya suspensión no deba mantenerse, los que se consideren asistidos de alguna causa legal deben exponerla y probarla ante la Corporación, que resolverá en primer término, pudiéndose apelar de sus resoluciones ante la Comisión provincial, segun se halla prevenido por las Reales órdenes de 12 y 27 de Julio de 1872, para los casos de exclusión que ocurran pasado el período electoral, respecto de los cuales nada ha previsto la ley.

Esta en su art. 49 hace porcasivo en el Rey, el nombramiento de Alcalde en las capitales de provincia; y puesto que el Marqués de Hazas ha insistido en la dimisión de los cargos de Alcalde y Concejal, fundándola en motivos de salud, si V. E. los estima bastantes para el del Alcalde, podría proponer á S. M. la aceptación de la renuncia, reservando al Ayuntamiento la apreciación de la causa alegada para el cargo de Concejal, puesto que dicho funcionario tiene esa doble investidura.

Caso de que la excusa formulada por este no le impidiese desempeñar el último cargo, sería ocasión de que la Municipalidad resolviese acerca de la incompatibilidad del mismo propuesta por varios Concejales, y sobre la cual ninguna providencia ha recaído.

Como la ley Municipal al tratar de las incompatibilidades usa de la frase de que en ningún caso pueden ser Concejales los que específicamente enumera en el art. 43, modernos y 39 antiguos, y en el art. 8.º de la electoral se previene que en cualquier tiempo que nazcan producen efecto, es evidente que el Ayuntamiento puede conocer y fallar sobre la atribuida al Alcalde.

Acercá de la incapacidad del Concejal D. Santos Gandarillas, á que se refiere el recurso interpuesto por D. Justo Colongues y D. Lino de Villa Ceballos, la Sección observa que el fallo de la Comisión provincial de 24 de Agosto último (folio 149) se funda en que no es obligatoria para aquel interesado la forma en que ha de verificarse la reparación y entretenimiento de cierto terreno por las calles que recorre el tramvía, por lo que, al desechar la proposición que le hizo el Ayuntamiento, no puede decirse que de aquí naciese contienda administrativa, sino que el medio propuesto no convenia á sus intereses. Siendo esto así, la Sección no ve méritos para alterar el acuerdo de la Comisión.

Con los diversos extremos que la Sección tiene la honra de proponer á V. E. abriga la confianza de que, renovado en gran parte el personal de aquel Ayuntamiento, bien por medio de elección parcial, ó cubriendo las vacantes interinamente, segun el número de las bajas y las circunstancias del tiempo, al tenor de lo que preceptúa el art. 46 de la ley orgánica, y persuadido el cuerpo electoral de la conveniencia de llevar al seno de la Corporación personas idóneas de las condiciones necesarias, se habrá alcanzado una solución práctica y legal en el presente conflicto.

Por las consideraciones expuestas, la Sección opina:

1.º Que el estado de perturbación del Ayuntamiento de Santander no tu-

vo carácter político en el sentido de la ley, siendo por tanto improcedente la suspensión del mismo decretada por el Gobernador, en cuanto la fundó en este motivo.

2.º Que en caso de que proceda mantener la suspensión de algunos Concejales por haber incurrido en desobediencia grave y haber insistido en ella después de apercibidos y multados, debe continuarse la providencia del Gobernador, solo respecto de los culpables, pasando las diligencias gubernativas al Juzgado correspondiente para lo que haya lugar en justicia.

3.º Que se alce la suspensión de los demás Concejales que no hayan incidido en aquella desobediencia con las circunstancias susodichas, sin perjuicio de las multas que se impongan á los merecedores de esta corrección por su negligencia ó abusos.

4.º Que una vez repuestos en sus cargos los Concejales que no continúan suspensos, corresponde al Ayuntamiento resolver en primer término sobre las incapacidades, incompatibilidades y excu-

sas legítimas de los que deban cesar en sus funciones, pudiéndose apelar del fallo ante la Comisión provincial.

5.º Que si por efecto de las bajas que se produzcan en la Corporación por todos conceptos, ocurrieran vacantes que lleguen á la tercera parte del número total de Concejales, se proceda á la renovación parcial en el modo que prescribe la ley, segun los casos.

6.º Que si V. E. estima fundada la renuncia que el Marqués de Hazas ha presentado del cargo de Alcalde, proceda que se le admita.

7.º Que se desestime el recurso interpuesto por D. Justo Colongues y D. Lino de Villa Ceballos, acerca de la incompatibilidad de D. Santos Gandarillas.

Y 8.º Que, dadas la sobreexcitación de los ánimos en Santander, producida por el estado de agitación en que se hallaba el Ayuntamiento suspenso, y la necesidad de que al volver éste al ejercicio de sus funciones no se reproduzcan las deplorables escenas que allí se han presenciado, debería V. E. ordenar al Gobernador de aquella provincia que presida por sí indefectiblemente todas las sesiones que celebre dicha Corporación, hasta que se cumplan los extremos propuestos en las anteriores conclusiones, velando con energía y celo por la estricta observancia de la ley en cada caso, y exigiendo la responsabilidad debida á los que incurran de nuevo en los excesos con lamentable levedad consentidos durante los graves acontecimientos que han dado lugar á la formación de este expediente.

Y confirmando con las conclusiones del precedente dictamen S. M. el R. y (q. D. G.), se ha dignado resolver:

1.º Que no ha sido procedente la suspensión total del Ayuntamiento de esa ciudad.

2.º Que deben, por lo tanto, volver al ejercicio de sus cargos los Concejales suspensos que, ó se hallaban disfrutando de licencia, ó no han incurrido en desobediencia grave ni insistido en ella después de haber sido apercibidos y multados.

3.º Que debe continuar la suspensión de los que se encuentran en este caso, remitiendo V. S. al Tribunal correspondiente todos los antecedentes relacionados con este asunto, para la resolución que en justicia proceda.

4.º Que luego que sea conocido el número de vacantes que, por efecto de estas medidas, resulten en el Ayuntamiento se proceda á su provisión por los medios que la ley determina, teniendo en cuenta que las vacantes de Concejales suspensos y sujetos á los Tribunales no son definitivas, y no pueden por lo mismo proveerse por elección.

5.º Que una vez reconstituído el Ayuntamiento con el número de Con-

no suficiente, según la ley, para el acuerdo, se sometían á él así los casos de incapacidad y de incompatibilidad, como las excusas y dimisiones de los concejales, teniendo muy presente lo que la ley establece acerca de estos particulares.

Que se desestime el recurso interpuesto por D. Justo Colongues y don Juan de Villa Caballeros acerca de la incompatibilidad de D. Santos Gandarillas.

Que se remitan al Juzgado, correspondiente todos los comunicados insertados en los periódicos de esa capital y referidos á las sesiones públicas ó secretas celebradas por el Ayuntamiento, así como las certificaciones literales de las actas á que aquellos escritos se refieren, por si el Tribunal estima que sus actores habian estado dentro de las prescripciones del Código penal, bien sea publicando relaciones incompletas ó inexactas de lo ocurrido en las sesiones, ó dando publicidad á las que eran de carácter reservado.

Que procure V. S. con el más solícito esmero la terminación de las graves disidencias que han ocurrido en el seno de ese Ayuntamiento, no solamente presidiendo sus sesiones, si no empleando para ello, sin contemplación alguna, todos los medios que le concede la ley, y que le sugiera su celo y experiencia.

De Real orden lo digo á V. S. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Enero de 1878.—Romero y Robledo.—Señor Gobernador de la provincia de Santander.

(Gaceta, núm. 16.)

MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr. Resultando de las noticias oficiales remitidas por el Ministerio de Estado que la «Doryphora» ha producido sus desgraciados efectos en algunos puntos de Alemania y de Holanda, sobre cuyas procedencias se encargó á las Aduanas el mayor cuidado por Real orden de 8 de Setiembre último, y deseando S. M. el Rey (q. D. g.) evitar en lo posible los perjuicios que podría sufrir la agricultura por la propagación de tan temible insecto, se ha servido resolver:

Que la prohibición consignada en la disposición 13 del Arancel de Aduanas para importar en el reino las patatas, sus hojas, tallos, mondaduras, cortezas y sus envases, de origen y procedencia de toda América, se amplíe para las que vengan del Imperio alemán y de Holanda.

Que con el fin de hacer más eficaz la vigilancia se limite la importación de las procedencias no prohibidas á las Aduanas de Irún, Santander, Cádiz, Badajoz, Alicante y Barcelona.

Que estas Aduanas recojan con la mayor escrupulosidad las patatas, sus desperdicios y envases de las procedencias no prohibidas, y las que se pretendan desembarcar de los buques, como sobrantes de provisiones, en los puertos, inutilizando las que no están completamente sanas y limpias.

Que se prohiba en todos los puertos no habilitados el desembarque de patatas y sus desperdicios de sobrantes de las provisiones de los buques.

De Real orden lo digo á V. E. para los efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de Diciembre de 1877.—Orovio.—Sr. Director general de Aduanas.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO.

Circular.

Cumpliendo con lo que se disponía en la circular que con fecha 1.º del corriente dirigí á las Juntas municipales del Censo, dictando instrucciones para que las mismas llevaran á cabo con la debida uniformidad y acierto las rectificaciones de las cédulas de inscripción, es de suponer que, conforme en aquellas se indicaba, el día 20 del mismo quedará terminado este trabajo en todos los Ayuntamientos de la provincia.

En este supuesto, es conveniente me dirija hoy á los señores Alcaldes, primeramente para significar á los párrocos que no me han remitido aun el cuadro que se les pedía por la referida circular, el deber en que están de enviarle inmediatamente, por ser ya de urgente necesidad para esta Junta provincial conocer el número de cédulas recogidas por cada una de las municipales y el de habitantes presentes, ausentes ó transeúntes, inscritos en aquellas, y en segundo lugar para que dispongan se proceda sin pérdida de tiempo por las Juntas que presiden: 1.º A la formación del resumen numérico de las cédulas; 2.º A la copia del mismo en los cuadernos auxiliares; 3.º A la formación del resumen municipal, y finalmente á la de los padrones en las hojas impresas destinadas al efecto.

La formación del resumen, que aparece al final de cada cédula, tiene por objeto expresar numéricamente los datos contenidos en las casillas 2, 3 y 16 de las mismas.

Dicho resumen, como se ve por la cédula, consta de dos partes: 1.º Población de derecho, ó sea la que componen los vecinos y domiciliados presentes ó ausentes del término, y 2.º Población de hecho que es la formada por los presentes solamente, bien consten inscritos como vecinos y domiciliados ó bien como transeúntes.

El resumen de la población de derecho, debe formarse cubriendo desde luego la casilla total, ateniéndose para ello á la 16.ª de la cédula y consultando además la 2.ª de la misma, para anotar en número en la primera línea á los vecinos que no tengan inicial al final del apellido; en la segunda, á los que figuren con la inicial A; en la tercera, á los que siga la E, y en la cuarta, aquellos que aparezcan con las E A. idéntica operación se practicará en las cuatro casillas restantes respecto de los domiciliados. Sumando después la columna de total, el número que resulte ha de ser igual al de individuos que en la cédula figuran sin la inicial T. Hecho esto y teniendo en cuenta la casilla

3.ª de la cédula, se descompondrá el total de cada línea de este resumen en el número de varones y hembras que correspondan, y con las cifras que resulte se cubrirán las dos primeras casillas.

Para el resumen de la población de hecho deben tenerse principalmente en cuenta los datos consignados en la casilla 2.ª de la cédula, y consultando los de las 3.ª y 16.ª, siguiendo por lo demás para vecinos y domiciliados el mismo procedimiento empleado en las cuatro primeras líneas del total del resumen de la población de derecho. Los transeúntes se anotarán en el resumen poniendo en la quinta línea á todos los que consten en la cédula con la inicial T, en la sexta á los que tengan las T E y se hallen naturalizados, y en la sétima á los que tengan las mismas T E y no lo estén, cuyas dos circunstancias deben constar en la casilla 16.ª de la cédula. Sumando después la columna de total, el número que resulte ha de ser igual al de individuos que figuren en la cédula sin la inicial T.

En la formación del resumen de las cédulas colectivas, deberá tenerse presente cuanto queda indicado respecto de las de familia con más lo prevenido en el art. 54 de la Instrucción, á fin de no incluir en él aquellos individuos que las Juntas hayan tachado, por constar ya en las cédulas de sus familias respectivas, cuando estas se hallen avicinadas en el término.

Terminada la formación del resumen numérico en los dos ejemplares de las cédulas, procede se de cumplimiento por las Juntas municipales al art. 52 de la citada Instrucción, que ordena el envío de uno de aquellos á la provincial con las formalidades y precauciones por el mismo artículo prevenidas.

La copia en las hojas de cuadernos auxiliares que respectivamente correspondan á la población de hecho y de derecho, de las cifras contenidas en los resúmenes numéricos de las cédulas y que sirve para facilitar después la formación del resumen municipal, se dispondrá por las Juntas, teniendo en cuenta 1.º Que de las dos hojas de que constan cada una de las carpetas de población de hecho y de derecho las que tienen encabezamiento deben ser las primeras, y las que carecen de aquel, las últimas de cada cuaderno, y 2.º Que al final de cada sección deberá hacerse la suma de los datos comprendidos en las cédulas de que se compone.

La materialidad de trasladar los datos contenidos en el resumen de cada cédula á las hojas de los cuadernos, no exige, á causa de su sencillez, explicación alguna por mi parte, y si solo por la de los encargados de verificarla gran cuidado, para evitar confusiones y trastornos en los asientos, perjudiciales siempre, á pesar de las rectificaciones que luego pudieran hacerse.

Copiados los resúmenes de todas las cédulas en los respectivos cuadernos, se suman estos, y los totales que resulten son los datos con los cuales se ha de

formar el resumen municipal, puesto que siendo iguales, el encabezado de este y el del resumen de las cédulas, corresponden á su vez por completo al de las hojas de cuadernos auxiliares. No deben olvidar las Juntas, al formar el resumen municipal, al consignar al pie del mismo las notas prevenidas en el art. 56 de la Instrucción respecto de los individuos del Ejército de Marina que se hallen inscritos colectivamente en el término, como igualmente respecto de los detenidos en los establecimientos penales, según lo dispuesto en los artículos 49 y 45 de la referida Instrucción.

Formado el resumen municipal, del cual se sacarán tres copias en los ejemplares impresos que obran en poder de las Juntas, estas deberán remitir dos de ellas, al propio tiempo que me envían los cuadernos originales, autorizando unas y otros, después de la fecha, con las firmas del Presidente y Secretario de la Junta municipal del Censo.

Terminados los resúmenes municipales, se ocupará la Junta de los padrones, que se formarán copiando las cédulas una por una, correlativamente, en cada renglón sin dejar claro alguno de cédula á cédula, cuidando especialmente de que no se hagan inscripciones indebidas y de que no figuren los transeúntes en la población de derecho ó los ausentes en la de hecho, á cuyo fin se observará que no constan en las hojas de padron para población de derecho las casillas que en las cédulas corresponden á vecindad ó domicilio. Total de los transeúntes, así como faltasen las hojas de los de la población de hecho las que en la cédula corresponden á puntos en que los ausentes se encuentran. Tanto en los cuadernos auxiliares como en los padrones será conveniente, para evitar cualquier confusión, ponerlos al frente ó cubierta de papel que diferencie los de la población de derecho de los de la de hecho.

Los padrones se formarán por secciones y cada sección encargará á copiarse en principio de plana encabezándola con el número y nombre que aquella tenga.

Después de terminadas por las Juntas censales todas las operaciones de que queda hecho mención, deberán en cumplimiento de lo que se preceptúa por los artículos 58 y 59 de la Instrucción, formar con arreglo al modelo del resumen municipal el de cada uno de los padrones con distinción de población de hecho y de derecho, autorizar dichos padrones con la firma de todos los individuos que componen la Junta, redactar una memoria ó reseña de cuantas operaciones y trabajos se hayan practicado desde su instalación indicando las dificultades que se haya tropezado y las disposiciones adoptadas en cada caso para obviarlas con todas las demás observaciones que les haya sugerido el estudio y la práctica de esta clase de trabajo y consideren oportuna para su ulterior mejoramiento, examinando, al propio tiempo, los se-

actos que se han distinguido en las operaciones censales y los servicios especiales que prestaron; pues el Gobierno de S. M. desea conocer y yo tendré el mayor placer en indicarle, los nombres de aquellas personas que con su patriotismo, celo y buen juicio contribuyeron mas al buen éxito de la empresa; y finalmente deben las Juntas remitirme con la citada memoria los dos padrones originales formados por aquellas y las cuentas de gastos producidos con motivo del censo. Todas las operaciones indicadas, como ordena el art. 60 de la repetida Instrucción, quedarán concluidas en el término de 30 días.

Restante, pues, para concluir llamar la atención de los señores Alcaldes y de las Juntas que presiden sobre la importancia y delicadeza de los trabajos que por la presente les encomiendo, complaciéndome en creer que no tendré motivos mas que para elogiar la actividad y celo por todos desplegada en el cumplimiento de tan interesante servicio.

Orense 19 de Enero de 1878.—El Gobernador Presidente de la Junta, Juan C. Bernad.

CUARTA SECCION.

ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Circular.—Subsidio.

La Direccion general de contribuciones en circular de 21 de Diciembre ultimo me dice lo siguiente:

En vista del expediente instruido en esta Direccion general con motivo de haber consultado la Administracion economica de la Coruña si podian admitirse a los Ayuntamientos encabezados por la contribucion industrial valores de la primera decima de los titulos del Empréstito en la parte que correspondia y por consiguiente si dichos Municipios pueden recibirlos de los contribuyentes industriales que, habiendo satisfecho a metalico la totalidad del cuarto trimestre de 1875-76, no han usado aun de la facultad que les compete de abonar en los referidos valores el décimo de la cuota anual consignado en el recibo del citado trimestre, con arreglo a lo prescrito en la Real orden de 21 de Abril y circular de 29 del mismo mes de 1876, este Centro directivo, de conformidad con la Intervencion general de la Administracion del Estado y con asentimiento del Banco de España, como Recaudador general de Contribuciones, ha acordado las disposiciones siguientes:—1.º Los contribuyentes por industrial de los pueblos encabezados para el pago de este impuesto, que hubieran satisfecho a metalico la totalidad del cuarto trimestre de 1875-76 y que no hayan usado

aun de la facultad de abonar en valores de la primera decima de las láminas del Empréstito nacional el 10 por 100 de la cuota de dicho año, cuyo importe se detalla al respaldo del recibo del referido trimestre, tienen derecho a satisfacer en dichos valores, como metalico, en cualquiera de los trimestres que vayan la parte correspondiente pagadera en esa especie, y los Ayuntamientos deberán recibirla.—2.º La Recaudacion, al recoger de los Municipios el importe de cada trimestre, y las Administraciones economicas al hacerse cargo del mismo, admitirán los expresados valores, siempre que su recepcion se justifique en la forma que se determina.—3.º Las Administraciones encargaran a los delegados del Banco que forman la relacion que expresa la regla 14 de la circular de 29 de Abril de 1876, por lo que respecto a los pueblos encabezados y contribuyentes por industrial que resulten sin haber entregado aun los valores del Empréstito que tienen derecho a entregar en pago de contribuciones, y pasaran dicha relacion a los Alcaldes de las localidades respectivas a los efectos de la disposicion 1.ª.—4.º Los Ayuntamientos dispondrán que el encargado de la cobranza de la contribucion industrial, al recibir valores del Empréstito, con seccion a la relacion expresada, haga las anotaciones y cumpla lo demás que prescriben las reglas 12 y 13 de la citada circular de 29 de Abril.—5.º Al hacerse cargo los agentes de la Delegacion del importe de cada trimestre o al entregarlo directamente en la Administracion, se recibirá como metalico a los Ayuntamientos encabezados los valores que hayan recibido de los contribuyentes debiendo acompañar al efecto factura detallada de los que hayan hecho efectivo parte de sus cuotas en dicha especie, consignando en una casilla la cantidad admisible segun los datos de que trata la disposicion 3.ª, y en otra casilla el sobrante cedido por los contribuyentes. En los recibos que facilite la Delegacion y en las cartas de pago que expidan las Administraciones se consignará, bajo la llave de metalico, el importe de la primera casilla, con el epigrafe de: «En valores del Empréstito», y despues del total del recibo se expresará el importe de la segunda casilla con el epigrafe de: «Valores del Empréstito, cedidos por los contribuyentes».—6.º Las Administraciones despues de cerciorarse de que están conformes los valores con el contenido de la relacion y de cotejar, si el importe admitido a cada contribuyente es el que arroja la relacion que aquellas tienen reser-

vada, segun la regla 15 de la referida circular, harán las anotaciones que determina la misma regla; y 7.º Los Ayuntamientos correspondientes serán responsables en primer termino para con la Hacienda de cualquier diferencia que se advierta entre los valores admisibles a cada contribuyente y los que puedan admitir de mas o sin derecho.

Lo que se hace publico por medio del Boletín oficial de la provincia para su mas exacto cumplimiento, y a fin de que llegue a conocimiento de los Ayuntamientos y contribuyentes interesados que se hallen comprendidos en la preinserta circular.

Orense Enero 17 de 1878.—El Jefe económico, Angel Guerra.

Negociado de Impuestos.—Cédulas personales.

La Direccion general de Impuestos, con fecha 10 del actual se ha servido trasladar a esta Administracion la Real orden que a la letra dice:

El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado a esta Direccion, con fecha 4 del actual la Real orden siguiente:—Excmo. Sr. Vista la propuesta elevada por V. E. sobre prórroga del plazo para adquirir sin recargo cédulas personales de este año económico, en la que hace presente, al propio tiempo, el estado de la recaudacion obtenida, las dificultades y obstáculos que se ofrecen a algunos Ayuntamientos de capitales de provincia para distribuir a domicilio dichas cédulas; S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo propuesto por esa Direccion general, y haciendo uso de la autorización que se concedió por el art. 10 de la ley de presupuestos de 11 de Julio último y disposicion 2.ª transitoria de la Instrucción de 21 del propio mes y año, ha tenido a bien disponer: 1.º Que se prorrogue el término para el repartimiento y adquisicion de cédulas sin recargo hasta el 28 de Febrero de este año. 2.º Que los Ayuntamientos de las capitales de provincia que, por sus muchas atenciones, no puedan cumplir con este servicio con la solitud y oportunidad que el mismo reclama, pueden en libertad de efectuarlo o de entregarle a la Administracion para que esta lo verifique, en cuyo caso deberán manifestarlo en el término de 15 días a contar desde la publicacion de esta Real orden en la Gaceta de Madrid, haciendo entrega en las Administraciones economicas de las cédulas que tuvierén a la sazón y de los padrones que hayan formado y antecedentes que tengan, entendiéndose que renuncian al 4 por 100 de cobranza que les correspondía por la de las cédulas que devuelvan. 3.º Que las devueltas ingresen en los almacenes de efectos estancados, previo examen y recuento. 4.º Que en aquellas capitales de provincia cuyos Ayuntamientos renuncien a la administracion del

impuesto sobre cédulas, se encarguen de ellas las comisiones de evaluación de la riqueza territorial. 5.º Que al efecto, y con cargo al 4.º por 100 de cobranza que ha de percibir el Tesoro, nombren los Presidentes de dichas comisiones los auxiliares, cobradores y escribientes que sean estrictamente necesarios sometiéndolo al número de estos a la aprobacion de esa Direccion general, sin perjuicio que presten sus servicios cerca de las comisiones los ordenanzas de los Negociados de Impuestos. 6.º Que a los cobradores, por orden del Presidente de la Comision de evaluación con la intervencion de la de la Administracion economica, se les entreguen las cédulas, aunque sin previo pago, en la forma que se entregan a los estancieros los efectos que han de espendir, y se les exija la fianza de 250, 500, 750, 1000 y 2000 pesetas, segun la importancia del cometido que se les atribuya para responder de las cédulas que reciban cada día, entendiéndose bien, que ni los Presidentes de las Comisiones de evaluación, ni los Interventores de las Administraciones economicas, autorizaran la entrega de cédulas por mayor valor del que signifique la respectiva fianza, ni sin que conste el pago o devolucion de las que antes recibieran, en la inteligencia de que la fianza podrá ser devuelta a los cobradores el día que cesen, si han respondido del importe de las cédulas recibidas. 7.º Que los cobradores que no obtengan el pago de la cédula del contribuyente a cuyo domicilio la lleven, dejen el escrito de apercibimiento que determina el art. 33 de la Instrucción, y 8.º Que por esa Direccion general se dicten y comuniquen las ordenes necesarias al cumplimiento de este servicio, y por la Intervencion general las prevenciones convenientes para regularizarle y obtener su total organizacion.

Y con el fin de que llegue a conocimiento de los Alcaldes de esta provincia y del publico, he dispuesto se inserte en este periódico oficial la preinserta Real orden haciendo esta oficina las prevenciones siguientes:

1.º Que antes de espirar la prórroga concedida para la adquisicion de cédulas sin recargo, las Corporaciones municipales deberán acreditar tener hecho el ingreso en la Caja de esta economica de todas las cédulas que hubiesen distribuido. 2.º Que el día 1.º de Marzo remitan listas duplicadas de todos aquellos individuos que se hubieren negado a recibir su respectiva cédula, para que con vista de este documento pueda hacerse el cargo a doble precio, entendiéndose que si alguno de los Ayuntamientos dejase de cumplir este servicio, los ingresos que se verifiquen no se admitiran por su primitivo valor.

Y por último, la Administracion de mi cargo desea de cumplir cuanto concierne al buen éxito de tan importante servicio, lo encarece a las Autoridades locales y a cuantos funcionarios intervengan en el.

Orense Enero 17 de 1878.—El Jefe económico, Angel Guerra.

BOLETIN OFICIAL EXTRAORDINARIO.

ORENSANOS:

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion en telégrama que acabo de recibir me comunica lo siguiente:

«En este momento regresan Sus Magestades de Atocha despues de recibir la bendicion nupcial, siendo aclamados por un inmenso gentio que se agolpa en el tránsito hasta Palacio. El dia espléndido ha hecho más brillante la solemnidad y el entusiasmo indescriptible.»

Cuyo fausto acontecimiento me apresuro á poner en conocimiento de los leales y honrados habitantes de esta provincia para su satisfaccion.

¡Viva el Rey!

¡Viva la Reina!

¡Viva la Princesa de Astúrias!

Orense 23 de Enero de 1878.

EL GOBERNADOR,
JUAN C. BERNAD.